



Un análisis de la política exterior y de seguridad española tras las elecciones generales

Rafael Calduch Cervera
Catedrático de Relaciones Internacionales
-Universidad Complutense de Madrid-

El pasado 24 de Junio de 2011, en la fase final de la legislatura ya que existen pocas dudas sobre la incapacidad del gobierno para evitar el adelanto de las elecciones generales, se aprobó la [Estrategia española de seguridad. Una responsabilidad de todos](#). Aunque el centro de atención política en España se concentra en la gestión de la crisis económica y el resultado electoral que dará, con toda probabilidad, el Gobierno al Partido Popular a nadie se le oculta que existen importantes cuestiones que afectan directamente a la política exterior y de seguridad de España y respecto de las cuales conviene anticipar los escenarios de evolución de las prioridades y directrices que seguirá el próximo Gobierno español.

Uno de los cambios más importantes que se van a producir es la revisión de la posición española como potencia con proyección mundial. Aunque por la extensión territorial y la dimensión demográfica España constituye una potencia media a escala global, de acuerdo con los datos económicos publicados por el PNUD en su [Informe sobre el Desarrollo Humano de 2010](#), su poder económico medido en términos de PIB nominal (2008) superior a potencias mucho más extensas, como Canadá y Australia, o mucho más pobladas como México, Brasil o la India. Este poder económico se ve reforzado por el crecimiento y expansión de las empresas multinacionales con sede en España, mediante su influencia cultural, especialmente a través del español como segunda lengua materna en el mundo y tercera en Internet, así como por su proyección política y diplomática tanto de forma directa como a través de su participación en la Unión Europea.

Esta posición como potencia mundial, recientemente avalada con su incorporación al G-20, exigirá una amplia revisión de las limitadas y, con frecuencia, contradictorias iniciativas exteriores desarrolladas por el gobierno socialista durante las dos últimas legislaturas. La necesidad de una mayor influencia política, una más eficaz diplomacia y una defensa estratégica de los ciudadanos e intereses españoles en el mundo, constituye un objetivo del programa del Partido Popular aunque no está claro que el futuro Gobierno, agobiado como el actual por la crisis económica, tenga la voluntad suficiente para movilizar los recursos humanos, materiales y financieros requeridos por tan ambicioso propósito.

El problema de la falta de medios de la política exterior de España es un problema endémico que ya fue expuesto por el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en su discurso en la Escuela Diplomática del 13 de Junio de 2001 y exhaustivamente analizado en el [informe realizado por la Comisión para la Reforma del Servicio Exterior](#) del 20 de Junio de 2005. Existen por tanto fundados motivos para pensar que durante la próxima legislatura y con un apreciable endeudamiento del Estado que deberá ser reducido a toda costa se emprendan las reformas que no se realizaron durante la década precedente.

Aunque se mantendrá la prioridad de las áreas geoestratégicas tradicionales: Europa, Mediterráneo (incluidos Magreb y Oriente Próximo) y América Latina, también se



potenciará la importancia de las Asia y África, regiones en las que la presencia activa de la acción exterior española es mucho más reciente y está menos estructurada.

Sin duda la Unión Europea constituye el área en la que los intereses españoles y del resto de países miembros han logrado un grado de imbricación que convierte los asuntos europeos en una parte decisiva de la política nacional. Este proceso de integración, que es el fundamento de la fortaleza de la UE como actor global, es también la fuente de su vulnerabilidad al provocar que los problemas políticos, económicos y sociales de algunos de sus miembros terminen afectando, en mayor o menor medida, la estabilidad de la totalidad de países de la UE como ya se ha constatado con las crisis financieras de Grecia, Portugal e Irlanda. En todo caso, la continuidad y consolidación de la UE resulta vital para la estabilidad política y económica mundial.

El PP mantiene una posición europeísta, tal vez más que la del Presidente Rodríguez Zapatero, pero a diferencia de éste y en línea con la trayectoria del Presidente Aznar durante su primer mandato, se trata de un europeísmo orientado por la defensa de los intereses nacionales como parte de los intereses europeos y no sacrificándolos a éstos. Esta diferente posición política y diplomática se revelará crucial cuando en los próximos años las instituciones europeas deban abordar los dos retos más urgentes: el avance en la gobernanza económica, especialmente mediante un avance en la fiscalidad común, y el desarrollo de las capacidades militares exigidas por la Política Común de Seguridad y Defensa.

La concepción de la seguridad y la defensa de Europa mantenida por el PP difiere sustancialmente de la que ha mantenido el Gobierno socialista, porque a diferencia de este los populares consideran no sólo factible sino necesario el reforzamiento del vínculo transatlántico entre la UE y Estados Unidos, como la única fórmula de salvaguardar los intereses estratégicos comunes y, al mismo tiempo, aunar las diferencias imperantes en el seno de la UE entre los miembros atlantistas y europeístas.

El reconocimiento de estas diferencias les lleva a defender un progreso en la integración europea, en particular en los asuntos militares y de política exterior, basado en la *geometría variable* que permiten las cooperaciones reforzadas y la cooperación estructurada permanente.

En la medida en que la paz, la estabilidad y la seguridad de Europa depende también de la Federación de Rusia como potencia militar y económica, el PP sostiene la necesidad de una relación institucional entre Madrid y Moscú que sirva para reforzar la cooperación económica y empresarial. Sin embargo, mantendrá una posición política y diplomática mucho más crítica con las iniciativas unilaterales que se adopten por los dirigentes rusos, especialmente en materia de seguridad y defensa, al considerar que a Rusia, como potencia militar mundial, se le debe exigir un mayor grado de responsabilidad y multilateralismo activo del que cabe esperar de otras potencias emergentes en áreas decisivas para España como son el Mediterráneo, Latinoamérica y Oriente Próximo.

El *realismo pragmático* con el que el PP pretende impulsar en la proyección europea de España, especialmente en las cuestiones económicas y de seguridad, permite anticipar el apoyo a la renovación del Acuerdo UE-Rusia pero su resistencia a nuevas



iniciativas, como la propuesta del Presidente Medvedev para un Tratado de Seguridad Europea, a las que considera de escasa viabilidad a corto plazo y fuente de divisiones entre los propios países miembros de la UE y la OTAN,

Respecto de América Latina, el PP aboga por una recuperación del liderazgo diplomático, económico y cultural desempeñado por España durante la década de los 90. Ello implica un impulso a las iniciativas multilaterales directas, como la Comunidad Iberoamericana de Naciones, e indirectas a través de las relaciones UE-ALC (América Latina y Caribe) junto con un decidido y activo posicionamiento crítico respecto de los regímenes y liderazgos que considera autocráticos como los de Chávez en Venezuela o Castro en Cuba.

Conscientes de la nueva realidad política y económica de Latinoamérica, en la que Brasil ejerce ya el liderazgo económico y va camino de ampliarlo a los ámbitos diplomático y militar, pretende apoyar la acción exterior española en esta región mediante el entendimiento político junto con la cooperación económica y cultural con los gobiernos menos radicalizados como los de Brasil; Chile; Colombia; Uruguay o México, dejando abierta la posibilidad de poder influir también en los de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

Sin duda el planteamiento del PP para las relaciones entre España y América Latina es ambicioso y suscita serias dudas sobre su viabilidad a corto plazo si tenemos en cuenta de una parte las apreciables discrepancias entre los propios países latinoamericanos que hacen difícil encontrar bases de acción común y por otra la escasez de medios que aquejarán a la política exterior española en los próximos años. De todos modos hay que reconocer que es preferible tener planes ambiciosos que no tener ninguno como ha ocurrido con el Gobierno socialista durante la última legislatura, tal y como se pudo comprobar en la última [Cumbre UE-ALC](#) celebrada en Madrid en Mayo de 2010 durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Especial importancia concederá el PP a las relaciones con África y Asia-Pacífico, en este último caso en particular con China. En ambos casos centra su atención en los aspectos económicos y estratégicos. Respecto del continente africano, excluida la franja de países árabes mediterráneos, considera la región como fuente de potencialidades económicas y de conflictividad. Los importantes recursos energéticos y de materias básicas que existen en los países del Golfo de Guinea unido a su proximidad geográfica con el territorio español canario y la existencia de Guinea Ecuatorial como antigua colonia, le permiten albergar expectativas de lograr una mayor penetración diplomática y empresarial en los próximos años. Queda por ver que realmente tales expectativas se puedan materializar de forma bilateral ya que la influencia franco-británica en la zona actuará de forma directa y decisiva contra todo proyecto empresarial o programa gubernamental español que tenga por finalidad lograr una mayor presencia en la región.

Para el PP las zonas del Sahel y África Oriental constituyen áreas de amenaza a la seguridad de los flujos comerciales (piratería) y de creciente conflictividad armada por la concurrencia de estados fallidos y una pobreza arraigada y generalizada que propicia la proliferación de grupos terroristas y de crimen organizado. Teniendo en cuenta las condiciones imperantes en los países de ambas regiones el PP orienta la prioridad de su acción exterior hacia las medidas de seguridad preventivas a corto y medio plazo sobre las medidas de cooperación y ayuda humanitaria cuyos efectos se



producirán a largo plazo y cuya aplicación está condicionada por la grave inseguridad que aqueja a estos países.

En relación con Asia-Pacífico, el PP atribuye la máxima prioridad a las relaciones políticas y económicas con China, con la que pretende alcanzar un grado de estabilidad institucional más sólido que el logrado hasta el presente.

La base de estas relaciones bilaterales será esencialmente de naturaleza económica, tanto comercial como financiera, admitiendo al mismo tiempo la convicción de que la acción exterior del gobierno de Beijing se irá radicalizando tanto económica como militarmente movido por la necesidad de aumentar el acceso los recursos energéticos y las materias primas que necesita para mantener sus fuertes ritmos de crecimiento económico como por la cada vez más clara intencionalidad de convertirse en una potencia militar a escala mundial y no sólo asiática. Una de las principales consecuencias de esta prioridad concedida a China será el mantenimiento de un bajo perfil en las relaciones con otras potencias de la zona como Japón, la India, Corea del Sur o Pakistán.

En relación con Afganistán, el plan de retirada de las tropas de la OTAN, en general, y de las españolas, en particular, se mantendrá por el PP como parte del doble compromiso alcanzado con el PSOE y nuestros aliados, pero es evidente que ello contribuirá a aliviar la presión que pueda ejercer la oposición y la opinión pública sobre el futuro Gobierno en un asunto cuya gravedad se ha incrementado en los dos últimos años por el número de víctimas entre las tropas españolas.

El PP imprimirá un giro a las relaciones mantenidas por el gobierno socialista con los países árabes del Magreb y Oriente Próximo. Respecto de los primeros, a la desconfianza respecto del régimen de Mohamed VI heredada de los gobiernos de Aznar se sumará la tensión interna que existe provocada por los movimientos de protesta política, especialmente el de corte islamista radical, y la efervescencia política imperante en los campamentos saharauis.

El PP considera la conclusión de la guerra civil en Libia y el proceso de reconstrucción postbélica como una ocasión para facilitar la presencia española en este país con el apoyo a la penetración de las empresas españolas, una oportunidad que para poder ser aprovechada debería ser negociada políticamente con Francia, Italia y el Reino Unido con el fin de evitar un enfrentamiento de intereses que, sin duda, perjudicaría las relaciones en el núcleo de la UE en un momento en el que la unidad frente a la crisis económica resulta crucial.

En cuanto al conflicto palestino-israelí, el PP no comparte la iniciativa de la Autoridad Nacional Palestina, apoyada por Hamas, de presentar la creación y el reconocimiento del Estado Palestino en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, el futuro gobierno podría encontrarse con el imperativo de tener que gestionar una decisión de esta envergadura sin haber participado en su aprobación o, incluso, en abierta oposición con su criterio político. Este sería un caso más que demostraría la urgencia y necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de política exterior y de seguridad.

Finalmente, el PP centrará sus prioridades de acción exterior en tres ejes temáticos: la articulación de una estrategia europea y mundial a la salida de la crisis económica, la



lucha contra el terrorismo y el cambio climático como factor de potenciación de las crisis y conflictos inter e intranacionales, abandonando programas quiméricos como el de la Alianza de Civilizaciones en el que nunca creyeron y nunca apoyaron.